



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: SILVIA ELENA ARROYAVE MÚNERA
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 016 2020 00275 01
Sentencia: S-123

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el día 29 de septiembre de 2022, puesto que la misma no fue recurrida por las partes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

SILVIA ELENA ARROYAVE MÚNERA demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible,

disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos, la devolución a Colpensiones de todas las sumas de dinero, bonos, cotizaciones, sumas adicionales, así como la reactivación de la afiliación a esa entidad. Pretende además se condene en costas y agencias al ente demandado.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 04 de noviembre de 1964; estuvo afiliada al Régimen de Prima Media – RPMPD- administrado por el Instituto de Seguros Sociales –ISS- desde el año 1988; por no recibir información técnica adecuada suscribió formulario de afiliación a PORVENIR S.A. desde año 2008, trasladándose al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS. Los asesores de PORVENIR S.A. no contaban con la capacitación adecuada que los acreditara informar o suministrar información veraz y suficientes para el traslado, no le hicieron advertencias sobre los riesgos de la afiliación al RAIS, no le advirtieron que la pensión podría ser inferior a la del RPMPD, tampoco que eventualmente no podría pensionarse teniendo en cuenta el capital, que el valor de la pensión dependería de la modalidad pensional que se escogiera. Además, fue engañada por cuanto le indicaron que, la condición pensional sería más ventajosa, el régimen de prima media desaparecería, la pensión sería con un monto mejor, que podía aspirar a una pensión anticipada.

Concluye diciendo que la decisión de trasladarse no fue espontanea, voluntaria y libre pues al ocultarle información definitiva tomó la decisión bajo engaño, y con el consentimiento inducido a error de que lo mejor era el RAIS. Agrega que la proyección de la mesada pensional en el RPMPD arroja un valor de IBL de \$2.164.100 y en el RAIS de \$964.200, siendo entonces inferiores las condiciones en dicho régimen pensional –RAIS-.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES dice que son ciertas la fecha de nacimiento de la demandante, el año de afiliación al RPMPD administrado por el ISS -1988-, el de traslado a PORVENIR S.A. en el año 2008. Sobre los demás hechos, manifiesta que no le constan pues se trata de situaciones que se encuentran por fuera de su conocimiento y dominio. Se opuso además a las pretensiones porque el acto de afiliación se encuentra ajustado a derecho, es válido y ha surtido plenos efectos jurídicos.

Como excepciones propuso, aspectos legales y financieros que impide el retorno del demandante al RPMPD, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción y/o caducidad de la acción, imposibilidad de condena en costas, innominada o genérica.

Por su parte PORVENIR S.A. dijo que no le consta la fecha de nacimiento, tampoco la de afiliación de la demandante al RPMPD, ni el valor de la mesada pensional proyectado por la parte actora. Sobre los demás hechos, indica que no son ciertos por cuanto brindó a la actora una información clara, suficiente y veraz, en cumplimiento de la normatividad vigente en su momento, siendo la afiliada quién eligió vincularse al RAIS, de manera libre, voluntaria e informada. Se opone a la prosperidad de las pretensiones en los mismos términos antes descritos, indicando que el traslado fue completamente válido, pues hubo afiliación voluntaria e informada.

Como excepciones propuso prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe.

Colpensiones llama en garantía a PORVENIR S.A. pretendiendo sea condenada a trasladar a órdenes de Colpensiones la totalidad de los valores obrantes en la cuenta de ahorro pensional de la demandante,

es decir, el capital ahorrado, junto con los rendimientos, los gastos de administración, los seguros previsionales y al fondo de solidaridad pensional, debidamente indexados, y correspondiente a los periodos que la actora estuvo afiliada a PORVENIR S.A. Lo anterior fundamentado en que la AFP PORVENIR S.A. no obró con diligencia y cuidado en el suministro de información al momento de propiciar el traslado de régimen pensional de la actora, lo que produjo un desequilibrio en el Sistema General de Pensiones.

Una vez llamada en garantía, PORVENIR S.A. sobre lo pedido dijo que, no es cierto lo dispuesto por Colpensiones puesto que como lo indica en la contestación de la demanda, brindó la información clara, suficiente y veraz a la actora en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha. Dice respecto al desequilibrio del sistema de pensiones que, se basa en situaciones hipotéticas que pueden darse o no, Colpensiones no puede pretender trasladar la responsabilidad de la descapitalización del sistema a esa AFP ignorando que la afiliación de la actora se dio por decisión propia. Propone como excepciones inexistencia de la obligación, culpa de la llamante en garantía, prescripción, petición antes de tiempo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2022, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

“PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ la afiliación de **SILVIA ELENA ARROYAVE MÚNERA** realizada a **PORVENIR S.A.** el 13 de marzo de 2008 (...). En consecuencia, **DECLARAR** que para todos los efectos legales la demandante nunca se trasladó al RAIS y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media.

SEGUNDO: Se **ORDENA** a **PORVENIR S.A.** trasladar a la demandante, al régimen de prima media administrado por **COLPENSIONES**.

TERCERO: Se **ORDENA** a **PORVENIR S.A.** devolver, al régimen de prima media, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo, las cotizaciones de forma completa, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos de administración, los aportes de solidaridad ni ningún concepto, pues se considera que en ningún momento debió producir efecto jurídico alguno dicho traslado.
(...)

CUARTO: Se **ORDENA** a **COLPENSIONES**-, reactivar la afiliación de la demandante y recibir todos los dineros que sean trasladados por **PORVENIR S.A.** Se le autoriza igualmente a que verifique, mediante un cálculo de equivalencias por cumplimiento de la orden dada en el numeral tercero de esta providencia de forma tal que pueda evidenciar el cumplimiento...

(...)”

Se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Se advierte que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, el apoderado judicial la **DEMANDANTE** solicita se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la ineficacia de traslado de régimen pensional, con las consecuencias que ello implica (devolución de todos los conceptos), pues la misma se sustentó en los parámetros que ha venido estableciendo la Corte Suprema de Justicia en la línea jurisprudencia desarrollada desde el año 2008; además quedó acreditado que el fondo no cumplió con el deber legal, profesional y ético que la asiste para brindar la información completa y veraz respecto al traslado.

Por su parte **COLPENSIONES** presentó alegatos de conclusión diciendo que, el traslado entre regímenes pensionales encontrándose el afiliado a diez años o menos de la edad mínima pensional, sólo se encuentra autorizado para los beneficiarios del régimen de transición,

por lo que la declaratoria de ineficacia de traslado de un contingente de personas con características diferentes a las antes referidas, pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema, a la par que pondría en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados (Arts. 48 y 334 de la Constitución Política de Colombia), razón por la cual solicita sea denegado el traslado de la demandante. Por otro lado, dice que en el evento en que la judicatura opte por acceder a las pretensiones de la demanda, solicita que se ordene a PORVENIR S.A., para que, a favor de Colpensiones, realice la devolución integral de las cotizaciones efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el RAIS.

Por su parte el apoderado judicial de **PORVENIR S.A.** en los alegatos de conclusión solicitó se confirme el traslado de los valores en los términos del numeral tercero de la sentencia de primera instancia, frente al traslado de las cuotas de administración, las sumas de seguro previsional y los saldos del fondo de garantía de pensión mínima, sin ordenar la indexación de los mismos, pues considera que dicha acción se constituye en un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones.

CONSIDERACIONES:

Se procede a conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, toda vez que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* la Sra. SILVIA ELENA ARROYAVE MÚNERA nació el 04 de noviembre de 1964; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- y realizó cotizaciones allí, el 03 de agosto de 1988; y

iii) el 13 de marzo de 2008 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PORVENIR S.A., efectivo a partir del mes de mayo de ese mismo año, entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada.

Ineficacia del traslado.

La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información*

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado".

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*"Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través

de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y

- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, los asesores del fondo nunca le advirtieron sobre los riesgos o sobre las características del RAIS, sólo le hablaron de beneficios.

De lo anterior no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en los alegatos de conclusión en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso de la demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Advierte asimismo la Sala sobre la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, que la Sala de Casación

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a ordenar también la devolución de las cuotas de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, y demás conceptos tema tratado por el apoderado judicial de COLPENSIONES en los alegatos de conclusión, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelven a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros

términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas y/o gastos de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la Sra. SILVIA ELENA estuvo vinculada a esa entidad.

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y conforme fue ordenado por el Juez de Primera Instancia, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826

en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

El Juez de Primera Instancia en la parte considerativa de la sentencia fue claro en advertir que los conceptos a trasladar a Colpensiones debían ser indexados - las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima. Sin embargo, en la parte resolutive no fue consignado específicamente esta orden judicial, por lo tanto, en este punto será ACLARADA la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, tampoco resulta procedente en este caso la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que

cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamados a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado no pueden estar sometidas a la prescripción.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el día 29 de septiembre de 2022, y la **ACLARA** en el sentido de que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8d14a43fa93749b37c0b55a20a0f76aa32ed4df8917eebf558a7f1e7c12c626d**

Documento generado en 11/05/2023 03:08:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>